



Expediente N°: E/04403/2015

RESOLUCIÓN DE ARCHIVO DE ACTUACIONES

De las actuaciones practicadas por la Agencia Española de Protección de Datos ante la entidad **A.E.N.A, Aeropuerto de Valencia y SEGUR IBERICA S.A.** en virtud de denuncia presentada por D. **A.A.A.** y teniendo como base los siguientes

HECHOS

PRIMERO: Con fecha de 28 de mayo de 2015 tuvo entrada en esta Agencia un escrito de **A.A.A.** en calidad de Coordinador Delegado del Sindicato de Vigilantes y Servicios de la Comunidad Valenciana el que declara que la empresa de seguridad SEGUR IBERICA, SA (en adelante SEGUR) presta servicio de seguridad en el Aeropuerto de Manises (Valencia), siendo la máxima responsable de salvaguardar la privacidad de los datos personales, la intimidad e incluso la seguridad de sus trabajadores, y obliga a sus trabajadores, adscritos al servicio del aeropuerto a exponer sus datos personales públicamente y a requerimiento de terceros mediante una tarjeta identificativa emitida por AENA que se adjuntan.

Manifiestan que la imposición descrita incumple la LOPD y la Sentencia Judicial emitida por la Audiencia Nacional de la que aportan fotocopia.

SEGUNDO: Tras la recepción de la denuncia la Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados, teniendo conocimiento de los siguientes extremos:

1. La Sentencia a la que se refiere la denuncia es de fecha 20/11/2013 y se interpone recurso contra la Orden del Ministerio del Interior INT/318/2011 de 1 de febrero sobre Personal de Seguridad Privada pretendiéndose la anulación del artículo 14.1 y del Anexo al que este precepto se remite. En la Sentencia se falla anulando la previsión contenida en el apartado 1 de su Anexo V que establece como dato incluido en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, excepto en la de los guardas particulares del campo y sus especialidades “el número del documento nacional de identidad o del número de identificación de extranjero, con todos sus caracteres alfanuméricos”.

2. Con fecha 16 de julio se solicita información a la empresa SEGUR relacionada con los datos que constan en el anverso y reverso de la tarjeta de identificación de AENA y el motivo por el que se consignan en la misma dichos datos identificativos y de la respuesta facilitada se desprende:

- Los datos que se consignan en la tarjeta identificativa con la que acredita AENA al personal que presta servicios en el Aeropuerto son los siguientes: Anverso (fotografía, empresa, cargo, nombre, apellidos y DNI) y reverso “El uso de esta tarjeta es personal e intransferible e implica el cumplimiento de las normas de seguridad de seguridad. La tarjeta debe llevarse bien visible durante su trabajo en el Aeropuerto y devolverse en la Oficina de Seguridad a su caducidad o al finalizar el motivo de su expedición. En caso de pérdida o incidencia, llamar al número.....o enviar a: Aeropuerto de Valencia. Esta

tarjeta debe ir acompañada del DNI/NIE/pasaporte del interesado”.

- Los motivos por los que AENA consigna estos datos identificativos en las referidas tarjetas, tendrían que ser exigidos a dicho organismo ya que es quien decide sobre estos datos y quien impone a las empresas que prestan servicios en el aeropuerto la acreditación que deben llevar en todo el recinto aeroportuario.

- La regulación de las acreditaciones aeroportuarias se regula en el Programa Nacional de Seguridad -PSN- aprobado de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 31/2003 de 7 de Julio de Seguridad Aérea, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2006. El PSN se aprueba conforma a los mandatos y métodos recomendados por el anexo 17 de la OACI al Convenio sobre la Aviación Civil Internacional así como el Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos que lo desarrollan, en particular el Reglamento (CE) nº 185/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicho programa nacional de seguridad para la aviación civil se adopta con la finalidad de establecer la organización, métodos y procedimientos necesarios para asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros, tripulaciones, público, personal de tierra, aeronaves, aeropuertos y sus instalaciones, frente a actos de interferencia ilícita, perpetrados en tierra o en aire, preservando la regularidad y eficiencia del tránsito aéreo nacional e internacional en el Estado español y su espacio aéreo. Dicho programa nacional de seguridad es aplicable entre otros a todas las entidades que aplican normas de seguridad aérea que lleven a cabo sus actividades en locales situados dentro o fuera de las instalaciones del aeropuerto y suministren bienes y/o servicios a los aeropuertos.

3. Con fecha 24 de agosto se solicita información a AENA, Aeropuerto de Valencia, relacionada con los datos que constan en el anverso y reverso de la tarjeta de identificación de AENA y el motivo por el que se consignan en la misma dichos datos identificativos y que llevan los vigilantes de seguridad de la empresa SEGUR en el aeropuerto de esa localidad y de la respuesta facilitada se desprende:

- Los datos que se consignan en la tarjeta identificativa con la que acredita AENA al personal que presta servicios en el Aeropuerto son los siguientes: Anverso (nombre, apellidos, DNI y fotografía, número de orden, nombre de empresa si procede, nombre del aeropuerto, los dos últimos dígitos del año de expiración en el color correspondiente a la zona a la que permite el acceso y fecha de expiración) y reverso leyenda informativa de carácter general sobre el uso de la tarjeta y la forma de actuar en el caso de pérdida.

- La justificación documentación solicitada se encuentra en el Programa Nacional para la aviación civil que es de difusión restringida, pudiendo desde la AEPD obtener dicha información de la Autoridad Competente (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) no siendo posible su difusión por parte de AENA.

- La regulación de las acreditaciones aeroportuarias se encuentra en el Programa Nacional de Seguridad aprobado de conformidad con el artículo 3.1 de la Ley 31/2003 de 7 de Julio de Seguridad Aérea, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2006.

Este programa nacional de seguridad se aprueba conforma a los mandatos y métodos recomendados por el anexo 17 de la OACI al Convenio sobre la Aviación Civil Internacional así como el Reglamento (CE) nº 300/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos que lo desarrollan, en particular el Reglamento (CE) nº 185/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo.

- Dicho programa nacional de seguridad para la aviación civil se adopta con la



finalidad de establecer la organización, métodos y procedimientos necesarios para asegurar la protección y salvaguarda de los pasajeros, tripulaciones, público, personal de tierra, aeronaves, aeropuertos y sus instalaciones, frente a actos de interferencia ilícita, perpetrados en tierra o en aire, preservando la regularidad y eficiencia del tránsito aéreo nacional e internacional en el Estado español y su espacio aéreo.

- Dicho programa nacional de seguridad es aplicable entre otros a todas las entidades que aplican normas de seguridad aérea que lleven a cabo sus actividades en locales situados dentro o fuera de las instalaciones del aeropuerto y suministren bienes y/o servicios a los aeropuertos. El incumplimiento de las normas contenidas en el programa nacional de seguridad para la aviación civil, puede ser objeto de sanción según se establece en la ley de seguridad Aérea 21/2003.

- La regulación relativa a las acreditaciones aeroportuarias viene recogida en el apartado 2 del capítulo 2 “seguridad en aeropuertos” del programa nacional de seguridad para la aviación civil, remitiéndose a su vez a la instrucción de seguridad SA-7 “procedimientos de acreditación de personas y autorización de vehículos” contenida asimismo en el programa nacional de aviación civil.

- Tanto en dicho capítulo como en la citada instrucción se regulan la necesidad, uso y contenido de las acreditaciones de personas en el ámbito aeroportuario, donde se recogen entre otros su contenido: nombre, apellidos, DNI/NIE/PASAPORTE y fotografía del titular. En las acreditaciones de los miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los funcionarios de aduanas se podrá poner su número de identificación del lugar del nombre y DNI.

- La acreditación debe llevarse en lugar visible, por tanto el no llevarla en lugar visible supone el incumplimiento en las normas de utilización de la acreditación, pudiendo llegar a su retirada definitiva, sin perjuicio de la sanción que pudiera corresponderle conforma a la Ley de Seguridad Área.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es competente para resolver la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo establecido en el artículo 37.d) en relación con el artículo 36, ambos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD).

II

Con carácter previo señalar que cuestión idéntica a la planteada ha sido resulta por la Directora de la Agencia mediante Resolución de fecha 16/02/2016, en la que se Archivan las actuaciones en base, en síntesis , a que “.. *considerándose que la normativa citada por AENA comunitaria y Nacional da cobertura legal a que en las tarjetas de los vigilantes de seguridad que prestan servicios en los aeropuertos de AENA figure su nombre y apellidos y DNI del afectado en base a la primacía del derecho fundamental a la seguridad sobre la protección de datos.*”

En dicha resolución se argumenta, lo siguiente:



<<III. En el caso analizado el denunciante, vigilante de seguridad de la empresa TRABLISA en el aeropuerto de Palma de Mallorca, su disconformidad con que en la tarjeta identificativa a la que está obligado a llevar visible en su puesto de trabajo en el aeropuerto en la que figura: el **nombre completo del vigilante y su número de identificación que coincide con el del DNI** y aporta, entre otros argumentos, en defensa de su pretensión, una Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 20/11/2013 por la que se estima la pretensión de **anular** la previsión ,contenida en el artículo 14.1 del Anexo V de la Orden del Ministerio del Interior INT/318/2011, que establece como dato incluido en la tarjeta de identificación profesional del personal de seguridad privada el número del DNI.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal -LOPD- en su artículo 6.1, consagra el principio de consentimiento o autodeterminación y dispone que:

“El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Por otra parte, en cuanto a la necesidad de que el interesado preste su consentimiento (o pueda oponerse) al tratamiento de un dato, debe indicarse que si bien el artículo 6.1 de la LOPD exige el consentimiento del interesado para el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, el artículo 6.2 prevé que no será preciso el consentimiento cuando los datos “se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.

En el caso que se examina, parece deducirse que el tratamiento del nombre y apellidos y del DNI en la tarjeta identificativa del vigilante de seguridad visible a terceros trae su origen, precisamente, en la necesidad de asegurar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas que vincula al personal laboral con la empresa AENA.

El tratamiento de datos sin consentimiento de los afectados constituye un límite al derecho fundamental a la protección de datos. Este derecho, en palabras del Tribunal Constitucional en su Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, Fundamento Jurídico Séptimo, primer párrafo, “(...) consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el estado o un particular (...).

Son pues elementos característicos del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos.



La LOPD además de sentar el anterior principio de “consentimiento” regula en su artículo 4 el principio de “calidad de datos” que resulta aplicable al supuesto de hecho planteado. El citado artículo 4, dispone en su apartado 1 que:

“Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

Conforme a dicho precepto sólo está permitido el tratamiento de datos personales cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido. Este artículo 4.1 consagra el “principio de pertinencia o proporcionalidad en el tratamiento de los datos de carácter personal”, que impide el tratamiento de aquellos que no sean necesarios o proporcionados a la finalidad que justifica el tratamiento, debiendo restringirse el tratamiento de los datos excesivos o bien procederse a la supresión de los mismos. En consecuencia, el tratamiento del dato ha de ser pertinente y no excesivo en relación con el fin perseguido. Únicamente pueden ser sometidos a tratamiento aquellos datos que sean estrictamente necesarios para la finalidad perseguida.

Este criterio, se encuentra recogido también en el artículo 6 de la Directiva 95/46/CE, aparece también reflejado en el Convenio 108, cuyo artículo 5 c) indica que “los datos de carácter personal que sean objeto de un tratamiento automatizado (...) serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades para las cuales se hayan registrado”.

La pertinencia en el tratamiento de los datos no sólo debe producirse en el ámbito de la recogida e introducción de los datos en el fichero, sino que habrá asimismo de respetarse en el posterior “tratamiento” que se realice de los mismos.

No se pone en duda que TRABLISA, como empresa de los vigilantes y AENA, como gestora del Aeropuerto de Palma de Mallorca, puedan tratar los datos personales de los empleados vigilantes de seguridad que prestan sus servicios en el aeropuerto de Palma de Mallorca, entre ellos los datos del nombre y apellidos y dni, al haber establecido una relación laboral.

La cuestión suscitada es si está justificado para la “finalidad” que tienen atribuida los vigilantes de seguridad en los aeropuertos de AENA que figuren en las tarjetas de identificación de los vigilantes de seguridad entre otros datos, **el nombre y apellidos y DNI** a la vista de terceros o se trata de datos excesivos, pudiéndose tal previsión ser sustituida por un número, código o clave menos invasivo para la intimidad de los vigilantes y para su seguridad.

III

Como ha quedado dicho en el citado artículo 6 de la LOPD el tratamiento de los datos requerirá el consentimiento inequívoco del afectado o el tratamiento, salvo que esté previsto en una norma con rango de **Ley**. Tampoco será preciso cuando los datos se refieran a las partes de un contrato y sean **necesarios para su mantenimiento o cumplimiento**.

Sobre el tratamiento de datos de carácter personal en el contexto profesional se ha pronunciado el Grupo de Trabajo previsto en el artículo 29 de la Directiva 95/46 que es un órgano asesor independiente que engloba a los representantes de ámbito europeo. En su Opinión 8/2001, adoptada el 13 de septiembre de 2001, prevé en el ámbito

laboral el tratamiento de determinados datos por parte del empresario para el cumplimiento de sus finalidades, si bien sujeto a determinadas condiciones, al recoger:

“Que asumiendo que los trabajadores han sido informados y el proceso es legítimo, el dato personal debe ser adecuado, relevante y no excesivo en relación con las finalidades para las cuales han sido recogidos y para las finalidades para las cuales han sido tratados posteriormente.

Asumiendo que los trabajadores han sido informados de la operación de tratamiento y presumiendo que el tratamiento es legítimo y proporcional, el tratamiento debe siempre ser justo con el trabajador

Esta exigencia de responsabilidad potencialmente extensa presenta varios aspectos en el contexto profesional. En todo momento, el más importante de estos efectos es que el empleador deberá siempre tratar los datos de carácter personal de la manera menos intrusiva posible.

Varios elementos son a tomar en cuenta para asegurar la discreción: los riesgos en curso, la clase de datos implicados, la finalidad del tratamiento”.

*En base a lo expuesto, el Grupo del artículo 29 incluye en el citado documento un ejemplo según el cual los empleadores tal vez pueden tener necesidad de conocer para ciertos empleos si los candidatos poseen un coche y si tienen el permiso de conducir y derecho de pedir esta información, pero sería contrario a este principio el exigir el modelo o el color del coche en cuestión. En definitiva, **la naturaleza de un puesto de trabajo puede requerir el uso de determinados datos que no quedaría justificado en otro puesto.***

AENA en el período de Diligencias previas ha informado (Hecho segundo), en síntesis, lo siguiente sobre la justificación de que en el tarjetas identificativas figure el nombre y apellidos y DNI:

A) En cuanto a la normativa que lo avala cita:

- a) La Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, en el artículo 3 establece que se aprobará el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil, en el que se determinarán las medidas y los procedimientos necesarios para garantizar la aplicación efectiva de las normas de seguridad de la aviación civil en los aeropuertos, aeródromos e instalaciones de navegación aérea y la prevención de actos ilícitos contra las actividades aeronáuticas. y las medidas previstas en el Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil serán aplicables en todos los aeropuertos abiertos a las operaciones comerciales de transporte aéreo.*
- b) El Programa Nacional de Seguridad –PNS- para la Aviación Civil, aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 5/05/2006, es de difusión restringida, por contener información clasificada de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 185/2010, de 4 de marzo, por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, y*



cuya parte pública se publicó en el B.O.E. nº 145, de 18 de junio de 2015.

El PNS ha sido aprobado con arreglo al mandato del Reglamento (CE) 300/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas para la seguridad de la aviación civil.

Por lo que, las medidas del PNS se deben aplicar en todos los aeropuertos nacionales e instalaciones de navegación aérea como es el caso de los aeropuertos titularidad de AENA.

*B) Y en materia de **acreditaciones**, el PNS se remite a los dispuesto en la Instrucción de Seguridad SA-7, Procedimientos de Acreditación de Personas y Autorización de Vehículos, que no ha sido objeto de publicidad, al formar parte de la información clasificada de la Unión Europea y que en el apartado 4.1.8 establece que la acreditación personal deberá mostrar: Nombre, apellidos, DNI/NIE/pasaporte y fotografía del titular.*

En las acreditaciones de los miembros de las fuerzas y cuerpos de Seguridad y de los funcionarios de Aduanas se podrá poner su número de identificación en lugar del nombre y/o DNI.

- a) Número de orden.*
- b) Nombre de la empresa, si procede.*
- c) Nombre del aeropuerto.*
- d) Los dos últimos dígitos del año de expiración en el color correspondiente a la zona a la que permite el acceso.*
- e) Fecha de caducidad.*

*Así consta en la página 3 del anexo A de la Instrucción de Seguridad SA-7 que se trata de un documento declarado **confidencial** y que no debe ser objeto de **difusión o divulgación**.*

C) En definitiva concluye:

a) que la constancia del nombre y apellidos y DNI en las tarjetas no es una medida adoptada por AENA en forma voluntaria o potestativa, pues el incumplimiento de esta obligación prevista en el PSN y en la Instrucción SA-7 es constitutiva de infracción administrativa sancionable con multa de hasta 4.500.000 € conforme a los artículos 43.

y b) Que, dada la función auxiliadora de los vigilantes de seguridad respecto de los miembros de la FFSS (actores principales) destinados en los recintos aeroportuarios, les corresponde verificar la autenticidad del personal obrante en los aeropuertos, entre ellos, de los vigilantes de seguridad mediante la solicitud de identificación y la petición del DNI o NIE, como medida ante posibles acreditaciones falsificadas a los efectos de prevenir la comisión de acciones delictivas y actos de terrorismo.

AENA termina alegando que el hecho de que Reglamento 185/2010, prevea que la tarjeta de identificación del personal del aeropuerto debe mostrar :

- a) El nombre y fotografía del titular.*
- b) El nombre del empleador del titular, a menos que se haya programado electrónicamente.*
- c) El nombre de la entidad emisora o aeropuerto.*



d) Las zonas para cuyo acceso se ha autorizado al titular.

f) La fecha de expiración, salvo haberse programado de forma electrónica, se pueden sustituir los nombres y zonas de acceso por una identificación equivalente; y que el hecho de la posibilidad de la sustitución por una identificación equivalente, teniendo en cuenta, que el artículo 6 apartado 1 del Reglamento 300/2008, prevé que los Estados miembros de la Unión Europea pueden **aplicar medidas más estrictas** que las normas básicas comunes que son mínimos y, por ende, establecer medidas más estrictas que las medidas detalladas en el Reglamento 185/2010, por lo que entienden que la constancia de los **nombres, apellidos y DNI** en las tarjetas aeroportuarias es en todo caso compatible con el Derecho de la Unión Europea en materia de seguridad aeroportuaria.

IV

El denunciante en apoyo de su pretensión alude a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 20/11/2013, en relación con la Orden del Ministerio del Interior INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre Personal de Seguridad Privada, que anula la previsión contenida en el apartado 1 de su Anexo V que establece como dato incluido en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, excepto en la de los guardas particulares del campo y sus especialidades, el número del Documento Nacional de Identidad o del Número de Identificación de Extranjero, con todos sus caracteres alfanuméricos”, excepción que se considera adecuada a otros casos como son hoy los espacios aeroportuarios que cada día exigen una mayor y especial vigilancia y seguridad, como lugares objetivo de actos terroristas.

Como prevé el Grupo del artículo 29 la naturaleza de un puesto de trabajo puede requerir el tratamiento de determinados datos que no quedaría justificado en otro colectivos, considerándose que la normativa citada por AENA comunitaria y Nacional da cobertura legal a que en las tarjetas de los vigilantes de seguridad que prestan servicios en los aeropuertos de AENA figure su nombre y apellidos y DNI del afectado en base a la primacía del derecho fundamental a la seguridad sobre la protección de datos>>.

Por todo ello, procede el Archivo de las actuaciones

Por lo tanto, de acuerdo con lo señalado,

Por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos,

SE ACUERDA:

1. **PROCEDER AL ARCHIVO** de las presentes actuaciones.
2. **NOTIFICAR** la presente Resolución a **A.E.N.A. Aeropuerto de Valencia**, a **SEGUR IBERICA S.A.** y a **A.A.A.**

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, en la redacción dada por el artículo 82 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, la presente Resolución se hará pública, una vez haya sido notificada a los interesados. La publicación se realizará conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004, de 22 de diciembre, de la Agencia



Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 116 del Real Decreto 1720/2007, de 21 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 48.2 de la LOPD), y de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, o, directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Sin embargo, el responsable del fichero de titularidad pública, de acuerdo con el artículo 44.1 de la citada LJCA, sólo podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la LJCA, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 del referido texto legal.

Mar España Martí
Directora de la Agencia Española de Protección de Datos